

LA DESCOMPENSADA ESTRUCTURA SOCIAL DE LA CHINA ACTUAL

PREFACIO

He Qinglian nació en Shaoyang, provincia de Hunan, en 1956. Siendo aún adolescente fue enviada al campo para trabajar en la construcción de una estación de ferrocarril; estudió Historia en la Universidad Normal de Hunan, y Economía en la Universidad Fudan de Shanghai, titulándose en 1985. Después de dar clases en Changsha y Guanzhou se trasladó a la Zona Económica Especial de Shenzhen, trabajando primero en el departamento de publicidad del comité municipal del Partido, y luego en el Shenzhen Legal Daily. En agosto de 1996 concluyó un libro sobre los males sociales y económicos de China tras dos décadas de reformas, rechazado por ocho o nueve editores por demasiado explosivo. Pero tras su publicación en Hong Kong con el título China's Pitfall, en Pekín apareció en enero de 1998 una versión expurgada, Modernization's Pitfall, con un prefacio de Liu Jili, vicepresidente de la Academia China de Ciencias Sociales, entonces consejero de Jiang Zemin. La publicación alcanzó un éxito inmediato, apareciendo como una dura acusación contra la flagrante desigualdad y corrupción imperantes en la RPCb y vendiéndose 200.000 ejemplares legales y muchos más pirateados.

El ensayo aquí traducido apareció en el número de marzo de 2000 de Shuwu [Casa del Libro], revista publicada en Changsha, que se agotó en diez días. Este artículo, más radical que el libro, suscitó una rápida reacción de las autoridades. El Departamento de Propaganda del Comité Central del PCCh lo denunció como documento «liberal», acusándolo de «incitar al antagonismo entre las diferentes capas de la sociedad china», y envió a Changsha un equipo de investigación para averiguar cómo se había podido publicar. En mayo se convocaron reuniones del Comité Provincial de Guangdong y del Comité Municipal de Shenzhen del Partido, en las que se dieron directrices confidenciales para que no se volvieran a mencionar sus obras en los medios de comunicación. A su regreso de un viaje al extranjero en junio, He Qinglian fue rebajada de categoría en el

Shenzhen Legal Daily, y sometida a arresto domiciliario. Su artículo, sin embargo, sigue siendo objeto de una intensa discusión extraoficial, en el contexto de un creciente fermento intelectual en China. En los círculos intelectuales se ha comparado, sólo parcialmente en broma, al famoso Informe sobre el Movimiento Campesino en Hunan de Mao publicado en la década de 1920, como un penetrante análisis de clase de la sociedad china actual. He Qinglian, repudiando esa analogía, ha dicho que allí donde el texto de Mao pretendía identificar los agentes, aliados y objetivos de una revolución social, su preocupación es únicamente la de presentar a sus compatriotas algunas realidades incuestionables del país en el que viven.

La estructura de clase de la sociedad china ha experimentado una profunda transformación desde los comienzos del período de reformas en 1978. La elite, que antes se seleccionaba sobre bases políticas, se recluta ahora a partir de criterios de «riqueza» y «mérito», lo que afecta profundamente a la estructura social subyacente. Esas nuevas capas de la elite están empezando a formar sus propias organizaciones sociales y grupos de presión, más allá de los canales políticos ya establecidos. La clase obrera, que hasta ahora se consideraba constitucionalmente como «clase dirigente», y el campesinado, clase «semidirigente», han sido marginadas; y se están desarrollando con rapidez organizaciones sociales intermedias. Todos estos procesos han traído consigo profundos cambios en las relaciones entre el Estado, la sociedad y los individuos. Tenemos razones para creer que, en cuanto China sea admitida en la OMC, los grupos de interés se multiplicarán, y las relaciones entre ellos sufrirán un cambio aún más complejo.

Antes del período de reformas, la sociedad china estaba muy centralizada y unificada, solapándose en ella en gran medida los centros políticos, económicos e ideológicos. El conjunto de la sociedad obedecía a un interés primordial —el del Partido— y el sistema de valores parecía igualmente unificado. Esta situación reflejaba la distribución de los recursos esenciales. En esa época, el gobierno monopolizaba no sólo los recursos materiales básicos de la sociedad —tierras, propiedades, rentas, etc.— sino también los recursos políticos del poder y el prestigio y los recursos culturales de la educación y la información. No existían recursos independientes, no gubernamentales, ni tampoco organizaciones intermedias, de forma que se podía hablar en esencia de una estructura binaria, «Estado-pueblo». El pueblo chino no poseía en esa época bienes materiales aparte de algunos muebles, ropa, utensilios de cocina, ropa de cama y poco más. Sus ingresos también aparecían entretejidos en el sistema estatal de distribución. Los campesinos vivían bajo las instituciones rurales de las Comunas Populares, y sus ingresos se regulaban siguiendo el sistema de «puntos por trabajo», mientras que los habitantes de las ciudades dependían de la escala salarial fijada por los Ministerios de Personal y de Trabajo. En aquel Estado fuertemente unificado, monolítico, era imposible la formación de grupos sociales con objetivos independientes.

Desigualdad y corrupción

El impulso de las reformas chinas ha consistido en redistribuir gradualmente la posesión de los recursos sociales. Sin embargo, como he señalado en repetidas ocasiones, la forma principal que ha cobrado ha sido un proceso de privatización de los bienes jurídicamente públicos por el estrato social que ocupaba el poder. Su característica más sobresaliente ha sido, por lo tanto, una hiriente desigualdad en la distribución de los recursos nacionales, una desigualdad que ha constituido el punto de partida de la reestructuración de las relaciones de clase en China en los últimos veinte años. La progresiva cristalización de las actuales elites políticas y económicas ha sido expresivamente descrita por el sociólogo Sun Liping y sus colegas, cuando escriben:

La transferibilidad entre los capitales políticos, económicos y culturales en China ha dado lugar a un tipo de intercambio significativamente diferente de los analizados por Ivan Szelenyi, al que podemos llamar «transferencia entre agentes con posición privilegiada». Característico de este fenómeno es el modelo de «no perder oportunidades», en el que las transferencias intergeneracionales de varios tipos de capital en el interior de un grupo familiar han reforzado los potenciales conmutables de esos diferentes capitales. En otras palabras, en cada convulsión en la distribución de recursos, los poderosos nunca han dejado pasar la oportunidad. Algunos de los momentos importantes en esa serie han sido: el resurgimiento de los exámenes para la entrada en la universidad, a escala de todo el país, a finales de la década de 1970; las oportunidades para estudiar en el extranjero en la de 1980; la apertura a la especulación en las reformas urbanas experimentales de mediados de esa misma década; la selección de la «Tercera Generación de Líderes» a finales de ella; la fiebre comercial (el «salto al mar») de comienzos de la década de 1990; y el comercio con los diplomas de enseñanza superior a mediados de la misma. Todos ellos eran eslabones de una ubicua cadena de acumulación de capital a cargo de ese grupo. Si es difícil el surgimiento de una clase media en China, se debe en parte a que muchos de los recursos necesarios para ello habían sido ya monopolizados¹.

Aunque el tamaño total de la elite que ahora controla el «capital global» no es grande, disfruta del poder de mando sobre la vida política, económica y cultural. La mayoría de sus miembros hicieron su fortuna, no mediante innovaciones tecnológicas o empresas industriales, sino reproduciendo y explotando posiciones monolíticas de poder para acumular riquezas personales.

En mi libro *The Pitfall of Modernization* [El riesgo de la modernización], publicado en 1997, estudié con bastante detalle este proceso de capitalización generada desde el poder. Desde entonces, no obstante, las formas de la corrupción en China han experimentado cambios considerables. Durante la década de 1980 y comienzos de la de 1990, la malversación era cuando más un asunto individual. Casos típicos fueron el de Yan Jianhong,

¹ Sun LIPING *et al.*, «Trends and Risks of Changes in China's Social Structure in the Near Future», *Strategy and Management*, núm. 5, Pekín, 1998.

antiguo presidente de la Sociedad Internacional de Inversiones de Guizhou, Gao Senxiang, director del Banco Industrial y de Inversiones Chino en Shenzhen, o Wang Jianye, que dirigió la Oficina de Planificación de Shenzhen. Pero hacia 1995 la corrupción se había convertido ya en algo organizado. Hay ciertos rasgos que caracterizaban esa corrupción organizada. A menudo los líderes de las organizaciones sociales eran los más implicados en los casos de corrupción, utilizando la autoridad pública confiada a su institución o rama del aparato estatal como instrumento clave de los «intercambios poder-dinero». Por su parte, las organizaciones sociales de menor nivel movilizaban los recursos públicos que controlaban para sobornar a las de nivel más alto, buscando más apoyo financiero, mejor trato administrativo o mayores oportunidades empresariales. El caso de Deng Bin en la ciudad de Wuxi, provincia de Jiangsu, ilustra esas tendencias. En el escándalo de la corrupción en el puerto de Zhanjiang (provincia de Guangdong), estaban implicados el secretario del Partido, el alcalde y figuras importantes de otros departamentos gubernamentales, posteriormente detenidos. Las revelaciones acerca de la corrupción en el Ejército siguen pautas semejantes.

Hacia 1998 la corrupción en China se había desarrollado más aún, llegando a una fase institucional o sistémica, definida por tres características. En primer lugar, la corrupción ha alcanzado a la mayor parte del Partido y del aparato estatal. En segundo lugar, la corrupción se ha convertido en un arreglo establecido en el interior de las instituciones, se comercia con los puestos oficiales como ventanillas para la redistribución del poder político, económico y cultural. Qi Huogui, antiguo secretario del partido de la ciudad de Dongfang (provincia de Hainan); Yang Shanxiu, ex alcalde y vicesecretario del partido en Anyang (provincia de Henan); Zeng Jingcheng, ex dirigente y vicesecretario del partido en el distrito de Zhoukou (Henan); y Zhu Zhenjiang, ex alcalde y vicesecretario del partido en la ciudad de Hebi (Henan), todos ellos vendieron puestos oficiales a gran escala². En tercer lugar, las campañas oficiales contra la corrupción ya no acostumbran a ser amenazas reales, sino más bien instrumentos de influencia política y chantaje para obtener ventajas personales. El caso de la ciudad de Ruian en el distrito de Wenzhou (Zhejiang), donde un sinvergüenza del lugar utilizó las pruebas de que disponía de la corrupción de los funcionarios locales como palanca para obtener el control sobre el conjunto de la estructura política y parte de la económica y de personal, es ilustrativo³. Estas formas de corrupción son específicamente chinas, comparadas con el escenario habitual en los países desarrollados, debido a la diferencia en el sistema social. Por otra parte, su balance es muy similar al de los modelos de América Latina o del Sureste asiático. El poder y la riqueza de unos pocos los mantiene en lo alto, pero la crudeza de sus vías de enriquecimiento les acarrea la falta de respeto moral de la sociedad.

² *Southern Weekend*, Guangzhou, 24 de abril de 1998.

³ Yang HAIPENG, «A rural Shaman Commanding a Whole Town», *Shenzhen Legal Daily*, 16 de diciembre de 1999.

Las elites política y económica

La sociedad china se puede considerar compuesta hoy en día por una pequeña elite, una capa intermedia mucho más amplia, y una floreciente capa de grupos marginalizados por debajo (aunque la composición de esas capas y las relaciones entre ellas siguen siendo fluidas). En la propia elite se pueden distinguir tres grupos, según los diferentes tipos de recursos: políticos, económicos o intelectuales. Comenzaremos examinando los dos primeros grupos, y luego proseguiremos con un análisis de la situación ligeramente diferente de la elite intelectual en el siguiente apartado.

Las elites política y económica chinas comprenden en conjunto unos siete millones de personas, el 1 por 100 de la población con empleo⁴. La elite propiamente política consiste en los altos funcionarios del Estado, los funcionarios locales de alto y mediano rango, y los directivos de las grandes instituciones no industriales del Estado. La composición de esta elite muestra un elevado alto grado de continuidad, ya que muchos de sus miembros ocupaban previamente posiciones en el sistema de economía planificada, aunque otros han entrado a formar parte de sus filas durante el proceso de tecno-burocratización del período de reformas. Sólo una pequeña minoría de la vieja elite ha perdido *status* social a causa de la jubilación o la derrota en las luchas fraccionales. La mayoría ha podido utilizar sus puestos administrativos anteriores para asegurarse un acceso cómodo a las oportunidades del mercado, y reconstituirse a sí mismas y a sus familias como miembros del «segundo pilar», la elite económica. Este grupo incluye a los directivos de los bancos y empresas públicas de gran tamaño, todavía predominantes en la economía china (acero, cemento, minas, ingeniería, industria aeroespacial, petróleo y petroquímica, así como los medios de comunicación y las telecomunicaciones); a los ejecutivos de las grandes y medianas empresas; y a los propietarios de empresas privadas grandes y medianas. Los cuatro primeros sectores mencionados, al menos, mantienen una relación literalmente familiar con la elite política dominante, ya que como hemos visto ha habido pocos cambios sustanciales en el personal desde el período de reformas, más allá de la transición de una elite política en una economía planificada a una elite económica en una economía de semimercado. Los cuadros de la elite comenzaron a «amar el mercado» a mediados de la década de 1980, y pronto comprendieron cómo utilizar el poder de que disponían para la acumulación personal de riquezas, iniciando el proceso de recomponerse a sí mismos como clase propietaria.

El contingente final de la elite económica, los propietarios de empresas privadas grandes o medianas, puede dividirse en tres tipos. El primero comprende las familias con respaldo oficial, que han sido capaces de adquirir riquezas mediante un dispositivo del tipo «una familia, dos sistemas» (los padres en el gobierno y los hijos haciendo negocios). Las conexiones fami-

⁴ Yang JISHENG, «An Overall Analysis of Current Social Stratification in China», *Chinese Social Sciences Quarterly*, núm. 3, Hong Kong, 1999.

liares de este tipo son ideales para las actividades típicas de una sociedad orientada hacia el mercado. Otro grupo ha emergido de ámbitos no oficiales, mediante el hábil intercambio de activos materiales «extrasistémicos» por recursos de poder «internos». También ha prosperado mediante operaciones orientadas hacia el mercado. Estos dos tipos están ligados a la elite política mediante lazos personales más que por canales institucionales, desplegando sus relaciones con los funcionarios del gobierno para maximizar sus propios intereses a expensas de los órganos de autoridad pública.

Por el contrario, el tercer tipo ha alcanzado el éxito principalmente aprovechando oportunidades ofrecidas por el mercado, en particular en el sector de alta tecnología. La formación de este estrato puede resumirse brevemente como sigue. A finales de la década de 1970 y comienzos de la de 1980, comenzaron a aparecer empresas privadas tanto en áreas rurales como urbanas, aunque siempre estrechamente relacionadas con los intereses de los gobiernos locales. Los cambios interminables en las definiciones oficiales del sistema económico chino –al principio, «la economía planificada dirige, la economía de mercado sirve de apoyo»; luego, «una economía planificada de mercancías», seguida por «una economía socialista de mercado»; y ahora «un sistema económico de mercado socialista»– han sido en parte el reflejo de la situación enfermiza de las empresas públicas desde mediados de la década de 1980. Al aumentar sus déficit, dejaron de funcionar como la principal fuente de recursos tributarios del gobierno, convirtiéndose de hecho en pesadas cargas presupuestarias. Con ese telón de fondo, las empresas privadas adquirieron más importancia y su situación legal se ha ido alterando gradualmente. Acompañando a este proceso, la situación general de esta capa de empresarios privados ha ido mejorando: compuesta antes principalmente de gente marginada en el sistema de empleo anterior, con una formación apenas aceptable, se está convirtiendo poco a poco en un estrato cuyo nivel educacional medio es más alto que el de la población del país. En 1998, la proporción de graduados universitarios en este sector había aumentado hasta el 20 por 100.

Las actividades de cabildeo de este grupo en procura de sus propios intereses se han hecho cada vez más enérgicas, y su entusiasmo por la participación política cada vez más intenso. Sus pertinaces esfuerzos les han permitido crear su propia organización, la Asociación de Empresarios y Comercio de Toda China (ACAEC), su propio diario, el *Chinese Commercial Times*, y obtener una representación cada vez más numerosa en organismos oficiales como el Congreso del Pueblo y el Comité Político Consultivo, aunque estas instituciones no constituyan el núcleo del poder político en China. Según un documento de 1996, más de 5.400 empresarios privados habían sido seleccionados o recomendados como miembros del Congreso del Pueblo por encima del nivel municipal, más de 8.500 como miembros del Comité Político Consultivo y cerca de 1.400 como miembros de comité en la Liga de la Juventud, por no hablar de los ocho miembros del propio Congreso Nacional del Pueblo. Muchos hombres de negocios han entrado también en órganos dirigentes de la ACAEC al nivel nacional, provincial,

comarcal o de distrito y municipal. Esas cifras se han incrementado con seguridad en los últimos años⁵. Esta capa ha recibido con alborozo el surgimiento desde 1998 del controvertido tema de la «revisión constitucional» para proteger la propiedad privada de cualquier vulneración, inspirado en la convicción de que las fortunas privadas forman parte legítima de la riqueza total de la sociedad, discusión que ha clarificado la lógica de la libre empresa tanto para los dirigentes como para la opinión pública en general.

Aunque el estilo de vida de los dos mayores componentes de la elite político/estatal y económica pueda parecer ligeramente diferente, comparten algunos rasgos básicos: alto nivel de vida, poco tiempo libre, consumo abundante y tendencias semejantes en sus diversiones e inclinaciones sexuales. La razón de esa semejanza es que el «consumo cultural» de la elite política, ya sea consumo sexual o entretenimientos en general, tiene lugar en la mayoría de los casos en terrenos ya cultivados por la elite económica. Al ir cristalizando gradualmente la conciencia de clase de esta elite, las estructuras espaciales urbanas comienzan a registrar un cambio considerable. En algunas de las ciudades económicamente más desarrolladas están empezando ya a formarse vecindarios donde se concentra la elite, y minicomunidades urbanas que responden al nuevo estilo de vida ambicionado por el grupo dominante.

Una elite intelectual

La elite intelectual está separada de la marcha general de los trabajadores técnicos por su posesión de una situación social de mando y de una autoridad creíble sobre la opinión pública. Este estrato ha experimentado escisiones y fracturas drásticas durante el período de reformas, emprendiendo una vía bastante diferente de la de la elite política y económica, con fases notablemente distintas. Bajo el liderazgo de Mao Zedong, quien observó en determinado momento que cuanto mayor es el conocimiento que uno tiene, más reaccionario se vuelve, los intelectuales se vieron apartados como «mezquinos de noveno rango» (en una jerarquía en la que se otorgaba formalmente a la clase obrera el primer puesto, a la campesina el segundo, y así sucesivamente). La política para el trabajo intelectual en las humanidades era estrictamente instrumental, al servicio de la revolución cultural de Mao. Al comienzo del período de reformas, la publicación de un artículo oficial con el título «La primavera de la ciencia» ofreció una señal alentadora a los intelectuales, la mayoría de los cuales se identificaban estrechamente con los cambios económicos y políticos de la época. Los intelectuales proporcionaron de hecho el principal apoyo social para los reformadores del Partido, mientras que los conservadores estaban concentrados sobre todo en la burocracia estatal. Durante la década de 1990, sin embargo, las desigualdades generadas por la adaptación a la economía de mercado han desencadenado una pugna creciente en el interior del estra-

⁵ Hu YUEMIN y Zhu YA, «The Development of the Private Economy and Structural Changes in Chinese Society», *Changbai Forum*, núm. 6, Changchun, 1996.

to intelectual. Aunque un segmento de la elite intelectual se ha convertido en un grupo de interés ligado al bloque político-económico dominante, son muchos más los que han sacado muy poco en limpio de las reformas económicas; por el contrario, su situación socioeconómica relativa se ha deteriorado irreversiblemente. La actitud de los intelectuales ante las reformas ya no es, por lo tanto, de apoyo incondicional, sino que está guiada por los dictados del interés propio.

Parte de la elite intelectual se ha beneficiado de las reformas. El conocimiento científico y tecnológico, así como ciertas ciencias sociales como la economía y los estudios legales se han convertido en un importante capital cultural desde el inicio del período de reformas. Los expertos técnicos, abogados, economistas e ingenieros competentes monopolizaron rápidamente las posiciones elevadas de las instituciones sociales, y una minoría de ellos entró incluso a formar parte del núcleo de la elite del poder. Este grupo de expertos ha tenido mucho éxito en la transformación de su capital político previo en capital social, y la red de conexiones sociales que les sirvió tan bien durante la época de la economía planificada ha vuelto a desempeñar un papel significativo en la China de mercado de hoy día. Impulsados por el interés propio, algunos elementos han conquistado posiciones que están en directa oposición a sus anteriores valores y creencias. Su amplio capital cultural y su ideología basada en el dinero, puestas al servicio de la elite económica, les ha capacitado para conseguir una participación notable en el primer asalto de la acumulación de riquezas.

Este grupo es un importante aliado de la nueva elite económica, que precisa la ayuda y cooperación de economistas, expertos legales, sociólogos, artistas, y muy en particular de los medios de comunicación que controlan la opinión pública, a fin de ganarse un puesto en el orden dominante legitimado. Hace algunos años quedó claro, durante las discusiones oficiales sobre la política aplicable al mercado de bienes inmuebles y al desarrollo de la producción de automóviles familiares, que los elementos de la elite intelectual eran capaces de influir sobre la política gubernamental tanto mediante su prestigio ante la opinión pública como por su papel en los organismos consultivos. Esto mostraba a las claras su alianza con ciertos grupos de interés y su enérgica participación en actividades preferentes orientadas hacia el mercado. Algún tiempo antes, los artículos aparecidos en Internet revelaban que los miembros de la familia de un bien conocido economista estaban implicados en empresas especuladoras. La cuestión importante aquí no es tanto qué actividades comerciales emprenden los parientes de alguien en particular, sino si la «teoría» se une al dinero para alcanzar intereses particulares de grupo, bajo la apariencia de servir al bienestar de todos, violando las normas sociales y contraviniendo la política oficial.

Las relaciones de este sector de la elite intelectual con la elite política son acusadamente diferentes del modelo prevaleciente antes del período de reformas. En su ensayo «Sobre las cuatro elites sociales en la China de hoy», el experto chino-americano Cheng Xiaonong dividía el conjunto del estra-

to intelectual en un «grupo comercial», un «grupo sofisticado», un «grupo populista» y un «grupo conservador», según la proximidad a determinados grupos de interés específicos. Se trataba de un análisis realista. Cheng argumentaba que, debido a su formación y a sus raíces sociales, el punto de vista de los tecnócratas de la actual elite política no está determinado simplemente por sus propios intereses institucionales, sino que es propenso a la influencia de elementos de la elite intelectual⁶. Esto marca un fuerte contraste con la disposición de la elite política de la generación anterior, convencida de que un gran foso ideológico la separaba de la elite intelectual de su época. Hoy en día, por el contrario, cuando esta última aparece dividida en diferentes campos, la elite política puede tomar ideas prestadas de los grupos intelectuales que mejor le convengan, originando un agudo «complejo de gabinete de expertos» en determinados círculos.

En realidad, los intelectuales nunca han formado un grupo de interés unificado, y es lógico que algunos de ellos hayan tejido lazos con el poder en el contexto de la rápida diferenciación social actual. El problema para el sector «gabinete de expertos» es su confusión de dos conjuntos de reglas esencialmente diferentes, las adecuadas a la «política» y las propias del «estudio». El objetivo de la política consiste en maximizar los beneficios sin preocuparse apenas por los medios, y en alcanzar un equilibrio entre los distintos grupos de interés. La conciencia social no es nunca el punto de partida del pensamiento de los políticos. Por el contrario, la investigación de los intelectuales persigue la verdad, y esa búsqueda puede llevarles también a la virtud o a la belleza. El sector de la elite intelectual vinculado con los círculos políticos tiende a mezclar esos dos conjuntos de reglas, presentando propuestas favorables a intereses particulares como una «nueva teoría general» y engañando así a la sociedad en su conjunto. Por otra parte, el sector «sofisticado» sufre el serio inconveniente de que muchos de sus miembros saben muy poco de los problemas reales de la sociedad, y sus críticas sociales tienden a ser excesivamente radicales, alejadas de las cuestiones empíricas. Comparados con estos dos tipos, los intelectuales populistas poseen una formación relativamente menos teórica. Muchos de ellos permanecen anclados en una ideología anticuada, incapaces de avanzar más allá de las máximas de la lucha de clases típicas de la versión china del marxismo. En esa medida, están próximos a los que Cheng Xiaonong califica como conservadores, la «izquierda» tradicional china contrapuesta a la «nueva izquierda» surgida en los últimos años. Conforme se acelera el cambio social, el conflicto y el reagrupamiento entre los intelectuales se hará cada vez más pronunciado; es muy probable que algunos viejos camaradas se conviertan en adversarios unos de otros en los futuros debates sobre cuestiones políticas y sociales.

La relación entre los intelectuales y el gobierno siempre ha sido problemática en los países en vías de desarrollo. La experiencia de América Latina y

⁶ Véase «On the Four Social Elites in Today's China», *Minzhu Zhongguo*, núm. 10, 1999, www.chinamz.org.

el Sureste asiático sugiere que cuando los intelectuales de esos países olvidan su conciencia y abandonan sus obligaciones sociales, el resultado es una profunda corrupción y el deterioro completo de la vida colectiva. Pero tampoco se restaurará la dignidad nacional simplemente reprochando a los países desarrollados que «también sufren problemas de corrupción, y no son mucho mejor que nosotros».

Una clase media subdesarrollada

Durante la década de 1980 y comienzos de la de 1990, las escasas rendijas existentes en las políticas vigentes permitían a muy poca gente de las capas sociales más bajas ascender en la escala económica. Las ocupaciones tradicionalmente asociadas a los estratos intelectuales perdían prestigio, mientras que el nivel de vida del personal gubernamental así como de los trabajadores de servicios y comerciales iba mejorando. Sin embargo, desde mediados de la década de 1990 algunas empresas técnicamente avanzadas han dado lugar a una nueva clase media, considerada en términos de renta y *status*. Ese grupo puede considerarse como una escala con dos niveles. En los escalones más altos se sitúan los trabajadores intelectuales bien pagados, los gestores de medianas y pequeñas empresas del sector público, los propietarios de medianas y pequeñas empresas del sector privado, los empleados de cuello blanco de empresas en las que participan inversores extranjeros, los empleados de los monopolios estatales, etc. En total, unos 29,3 millones de personas, es decir, el 4 por 100 del total de la fuerza de trabajo⁷.

En los escalones más bajos encontramos a los técnicos especializados, investigadores científicos, abogados, profesores de educación superior y media, empleados corrientes de actividades artísticas o de los medios de comunicación, funcionarios intermedios del Estado, gestores de nivel medio y bajo de las empresas públicas, autoempleados del nivel más alto y comerciantes. Estos grupos suman en total unos 82 millones de personas, el 11,8 por 100 de la población empleada. Con algunas excepciones –algunos propietarios de pequeñas y medianas empresas privadas, ejecutivos de las correspondientes empresas públicas, empresarios individuales o comerciantes, y los empleados más antiguos de los monopolios estatales–, la mayoría de este estrato tiene un buen nivel de formación y es de espíritu progresista. Constituyen el equivalente a la clase media con títulos universitarios de los países occidentales, aunque constituyen una franja más pequeña del conjunto de la población.

Una clase obrera marginada

La clase obrera china, tal como se la definía tradicionalmente, estaba formada principalmente por los empleados de las empresas públicas. Hoy en

⁷ Véase Yang JISHENG, «An Overall Analysis of Current Social Stratification in China», para esta estimación y la del siguiente párrafo.

día, sin embargo, la clase obrera china comprende dos grandes sectores, uno de los cuales sigue siendo el de quienes trabajan en grandes empresas públicas o de propiedad colectiva; el otro está formado por los empleados de empresas extranjeras, mixtas, de Hong Kong o taiwanesas, o en empresas «municipales y de pueblo». Esos dos sectores se distinguen por el tipo de relación existente entre la fuerza de trabajo y el Estado (o la agencia de gestión que le representa), en el primero de ellos, y entre la fuerza de trabajo y los propietarios del capital (o sus agentes) en el segundo. En la actualidad, con la excepción de los empleados de cuello blanco de las empresas euro-estadounidenses, todas las categorías de la clase obrera china se encuentran en gran confusión y desorden.

Antes del período de reformas, la fuerza de trabajo industrial en China estaba dividida, como en cualquier economía capitalista, en los sectores del núcleo y los periféricos. Los primeros eran empleados regularmente inscritos en las empresas públicas; los segundos, trabajadores con contrato indefinido o temporal de empresas colectivas en áreas urbanas o rurales. Éstos representaban sólo una pequeña parte del total de la fuerza de trabajo industrial. La relación entre la clase obrera y el Estado comprendía dos dimensiones principales: por un lado, existía un equilibrio entre los gestores y los trabajadores en la esfera de la producción, donde se determinaba el proceso de trabajo en la línea de producción y el alcance de la participación o el control de los trabajadores sobre el mismo; y por otro, operaba la esfera de la distribución, en la que el Estado asignaba al trabajador una porción determinada del producto de su trabajo, fijando su salario, seguros médicos, sistema de pensiones, etcétera. En aquellos días no era tanto el sistema de trabajo lo que generaba descontento sino el sistema político totalitario. En el proceso de producción el personal directivo no ejercía mucho control real sobre sus empleados, que trabajaban un poco al ritmo que querían; los jefes tenían que alcanzar muchos compromisos para ganarse su cooperación. El dicho «las empresas públicas no tienen ni idea de lo que significa eficiencia» reflejaba esta realidad. En contrapartida, bajo la incesante vigilancia del partido y sus miembros, los trabajadores no tenían margen de libertad alguno en su vida personal. Una conversación casual, incluso en ámbitos muy privados, podía conllevar el riesgo de ser calificado como contrarrevolucionario. En cuanto a los conflictos en la esfera de la distribución, se referían principalmente a la equidad en el reparto de recursos tales como las promociones de rango y salario o las ayudas para vivienda. China no poseía una clase media, pero los trabajadores de las empresas públicas podían considerarse como una «semiclasa media» en aquella época. Los estrictos controles residenciales operaban como una frontera social que impedía a los campesinos emigrar a las capitales, bloqueando los flujos entre clases sociales en beneficio de los habitantes de las ciudades. En esas condiciones, la gran mayoría de una «clase media sucedánea» estaba constituida por trabajadores de las empresas públicas y otras unidades de trabajo urbanas, organizados todos ellos bajo el control del partido.

Una vez que se pusieron en marcha las reformas, en cambio, el mercado de trabajo se abrió y el control estatal sobre la vida privada se fue amino-

rando gradualmente. La gente podía ahora criticar el gobierno en sus conversaciones privadas sin temor a ser encarcelada, si bien los espacios públicos seguían siendo harina de otro costal. En el espacio intermedio entre lo que antes era una relación directa entre el Estado y la clase obrera, ahora se ha introducido toda una serie de agentes intermedios, burócratas, mandamases locales y capitalistas. Con la diversificación de los sistemas de producción, las relaciones entre los trabajadores y sus empresas exhiben ahora todo un abanico de posibilidades.

Contratos colectivos

El «contrato colectivo» es el que predomina en las empresas públicas o colectivas, que agrupan en torno al 70 por 100 de la fuerza de trabajo industrial, o sea unos 120 millones de personas⁸. En esas empresas encontramos personal directivo, células del partido, consejos de representantes de los trabajadores y sindicatos. En teoría, la coexistencia de todos esos organismos debería equilibrar el poder entre ellos, pero los procedimientos diseñados para distribuir al personal han traicionado ese objetivo. A menudo es un directivo de la empresa quien ocupa al mismo tiempo el puesto de secretario del partido en la misma, mientras que a otro se le asigna la presidencia del sindicato y el propio presidente de la compañía puede ser representante del consejo de trabajadores. La razón es muy simple: todo el personal directivo, incluyendo los jefes, son también, nominalmente, empleados del Estado, y gozan, por lo tanto, del mismo derecho que los trabajadores ordinarios a formar parte del sindicato. Hablando en general, los contratos colectivos se han respetado muy poco en los últimos años. Muchas empresas no se toman en serio los documentos que firman, algunas simplemente pasan por alto determinadas mociones, otras proporcionan información falsa, y las hay de la opinión de que los contratos son papel mojado, ignorando los artículos contenidos en ellos. A veces, lo que sucede en la práctica es exactamente lo contrario de lo estipulado en un

⁸ Las fuentes para este apartado son: Chang PING y Yu LIUWEN, «Zhou Litai Lodges Law-suits for Contracted Workers—Almost a Hundred Cases of Workplace Injury Go to Court», *Southern Weekend*, Guanzhou, 26 de noviembre de 1999; Zhao YUNSHENG y Liu RUMIN, «The General Situation and Potential Measures against Work-Place Disaster in China», *Labour Safety and Health*, núm. 1, 1996; Xiao XIKANG, «A Blood-Tainted Report from a Coal Town on Labour Safety Legal Practice», *Jiangxi Labour*, núm. 2, 1995; Ji WENSHENG y Li JUNCHUANG, «A Brief Discussion of the Violation of Employees' Rights in Privately-Owned Firms: Major Manifestations, Causes and Counter-Measures», *Internal Reference on Labour Issues*, núm. 4, 1997; «A Motion to Protect the Labour Safety Rights of Female Employees in Three-Capital, Township-and-Village, and Collective Firms», *Labour Safety*, núm. 5, 1997; «National Production Safety Briefings for 1996», *Labour Safety*, núm. 6, 1997; Tang CAN, «The Dual Identity and Discrimination against Female Migrant Workers in the Metropolis», *Sociological Studies*, núm. 4, Pekín, 1996; Liu YUANYUAN, «Black Curtains Multiply in Zhanyu factory-Migrant Workers' Crises Multiply», *Yangcheng Evening News-Weekly Supplement*, 22-28 de octubre de 1998; «Seven Female Workers Forced to Strip for Examinations—a Taiwanese-Financed Firm Infringes Employees' Human Rights», *Shanghai Legal News*, 22 de julio de 1998; «Where are Laws, Where is Justice?», *Newspaper and Periodicals Digest*, 27 de julio de 1998.

contrato. Por ejemplo, en el contrato colectivo firmado por una empresa de Changchun, capital de la provincia de Jilin, en el nordeste del país, se establece que cuando se acuse a un trabajador de cualquier quebranto de la disciplina, el sindicato debe formar parte de la investigación, verificando los hechos y firmando el veredicto, gozando de un poder vinculante en la decisión que se tome. Pues bien, cuando el presidente del sindicato difirió en cierta ocasión de la dirección con respecto al castigo que se debía imponer a un trabajador, el director en cuestión no sólo ignoró su opinión, sino que lo rebajó de categoría. Casos como éste no son en absoluto desacostumbrados. El resultado es que la mayoría de los dirigentes de los sindicatos tienen que reaccionar «prudentemente» frente a las vulneraciones contractuales por parte de los ejecutivos. En sus propias palabras, «un contrato colectivo es efectivamente un acuerdo legalmente obligatorio. ¿Pero quién se atrevería a acusar ante un tribunal a sus jefes? Correríamos el riesgo de perder nuestro cuenco de arroz»⁹.

En las fases iniciales del período de reformas, era un hecho constatado que los directivos de las empresas públicas no otorgaban gran prioridad al aumento de la productividad o a mejorar la calidad de la producción, sino que dedicaban casi toda su energía a negociar con sus empleados las peticiones de éstos en demanda de una participación estable o acrecentada en el presupuesto de la empresa. Pero bajo las presiones cada vez mayores del mercado en la década de 1990, las empresas públicas, en general atrasadas en cuanto a sus equipos y faltas de recursos financieros, han caído en un círculo vicioso, al contraerse el mercado para sus productos, desviarse fraudulentamente sus fondos hacia empresas privadas o directamente al bolsillo de pequeños equipos directivos, y reforzarse la presión fiscal del gobierno sobre ellas. Esto ha hecho que creciera constantemente el número de desempleados. En 1999 el fantasma del desempleo amenazaba a la mayoría de las empresas públicas. Las cifras oficialmente publicadas elevan el número de parados a 12 millones, pero las reales deben de ser mucho más altas. En resumen, los trabajadores de las empresas públicas han visto hundirse rápida y drásticamente su *status* social, perdiendo día tras día su posición antes privilegiada. El resultado ha sido un importante estrechamiento de las capas medias de la sociedad china, y una rápida expansión de las capas más bajas, fórmula que obviamente conduce a una mayor inestabilidad social.

Inversiones occidentales

La situación es muy diferente en las empresas que combinan capital occidental con la participación de empresas públicas chinas o en las establecidas en China únicamente gracias a la inversión de multinacionales. En éstas el sindicato, la sección del partido y el personal de gestión chino suelen formar un frente unido, que adopta la misma actitud hacia los inversores

⁹ *Worker's Daily*, Pekín, 24 de febrero de 1997.

extranjeros en su empresa que la asumida por los gestores de las empresas públicas hacia el Estado, esto es, tratarlos como un fondo de beneficencia. La mayoría de estas empresas están bien provistas financieramente, pagan salarios relativamente altos, ofrecen condiciones de trabajo más limpias, seguras y modernas, y proporcionan mejor alojamiento y otras prestaciones que las grandes empresas públicas. Sus empleados suelen por eso despreciar la envidia de otros trabajadores. Las relaciones entre la dirección y la fuerza de trabajo no muestran una aguda lucha de clases. Con frecuencia, de hecho, el descontento de los trabajadores no se dirige hacia los propietarios extranjeros sino contra los directivos chinos, con quejas de que son incompetentes, corruptos o inclinados al nepotismo. En términos del capital total invertido y del número de empresas, este tipo de establecimientos es todavía muy marginal. Las corporaciones estadounidenses constituyen el tercer inversor extranjero en China, pero el valor conjunto de las inversiones europeas y estadounidenses no alcanza ni siquiera el 10 por 100 del capital invertido en la RPCh. De un total de 7 millones de trabajadores empleados por el capital extranjero, las empresas occidentales tan sólo representan una pequeña proporción. A ojos de los medios de comunicación, su importancia reside en la tecnología avanzada que introducen y en la formación en el extranjero que pueden ofrecer a los directivos chinos. También las escuelas empresariales dirigidas por extranjeros en las grandes ciudades pueden difundir ideas sobre la gestión de los recursos humanos y proporcionar una formación básica para la mercadotecnia moderna y las técnicas de dirección de empresa. A largo plazo, esto podría dar algunos resultados, en la medida en que los socios occidentales y chinos lleguen a la conclusión de que la gestión de la mano de obra mediante negociación y consenso crea los mejores incentivos para una fuerza de trabajo leal.

Empresas asiáticas: retorno al pasado

En el resto de los sectores, la regresión en las relaciones capital-trabajo es un fenómeno sobresaliente de la China actual. Estamos viviendo un retorno a la situación habitual durante la revolución industrial del siglo XIX, sobre la que Marx escribió su monumental obra *Das Kapital*. En la RPCh de hoy día, los trabajadores empleados en las empresas financiadas con capital asiático se ven típicamente obligados a esforzarse continuamente durante diez o doce horas al día, con pequeñas interrupciones prefijadas de tres o cuatro minutos para ir al lavabo, sin descanso de fin de semana. Los trabajadores de estas empresas ganan salarios muy bajos, en condiciones de trabajo pobres y peligrosas. Los accidentes son frecuentes y los incendios debidos a la ausencia de medidas de seguridad originan regularmente docenas de bajas. Muchas fábricas de productos tóxicos no toman medidas preventivas de ningún tipo, fenómeno ampliamente recogido por los medios de comunicación. En las empresas establecidas en particular por el capital taiwanés o surcoreano suelen declararse luchas entre los trabajadores y los propietarios. A lo largo de la costa suroriental, en ciudades como Shenzhen, Dongguan o Nanhai, la incidencia de los conflictos capi-

tal-trabajo es muy elevada. Aunque la provincia de Guangdong ha establecido Leyes de Protección del Trabajo, los «dragones del Este asiático» rara vez las toman en serio.

Este modelo regresivo pone al gobierno chino en una situación muy difícil. China es todavía «un Estado socialista en el que la clase obrera es su propio dueño», y todos los trabajadores gozan de los derechos humanos básicos. En realidad, los gobiernos locales que compiten por atraer al capital extranjero acostumbran a inclinarse ante las demandas de los inversores. Además, muchos cuadros locales cultivan sus buenas relaciones con los propietarios extranjeros para su propio interés personal. Aunque conocen perfectamente cuáles son las condiciones de trabajo y de vida en esas fábricas, nunca intervendrían para cambiarlas. Cuando los medios de comunicación más atrevidos sacan a la luz historias terribles suelen negarse a cooperar con los periodistas y tratan de impedirles la búsqueda de la verdad. Siempre que ocurren desastres importantes, como los incendios que frecuentemente queman a decenas de obreros, las investigaciones descubren regularmente que los cuadros de los departamentos responsables de los gobiernos locales nunca obligan a los inversores a instalar alarmas o extintores como dictan las normas. Sin embargo, la investigación de tales accidentes suele concluir rápidamente con la excusa de que «para proteger el crecimiento económico local, no debemos enfriar el entusiasmo de los inversores». Entre las ya marginalizadas masas de obreros y campesinos, los trabajadores de esa zona, mayoritariamente compuestos de inmigrantes del interior, son los más desprotegidos: lejos de su hogar y su familia, privados de cualquier canal para dar a conocer sus quejas.

Campesinos sometidos a presión

El campesinado chino fue el mayor beneficiario de la primera etapa de las reformas. El sistema del contrato por familias dio a los campesinos por una vez la sensación de haber sido liberados. Sin embargo, conforme se desplazaba hacia las áreas urbanas el foco de la reforma, las regiones rurales han experimentado problemas cada vez más graves, que muchos expertos y estudiosos especializados en la investigación campesina y agrícola han señalado en los últimos años. Wen Tiejun, de la Academia China de Ciencias Sociales, ha llegado a afirmar que la agricultura china se ha convertido en un sector económico que sólo alcanza a cubrir los costes, sin proporcionar beneficio neto alguno. Según las autoridades, los problemas fundamentales que afrontan los campesinos chinos son de tres tipos. En primer lugar, trabajan bajo cargas económicas excesivas impuestas por el Estado. Se ha creado recientemente una serie de aparatos gubernamentales para la administración de las comunidades rurales, conocidos como «los siete institutos y cuatro organismos». Esos pesados organismos burocráticos alojan a un creciente número de funcionarios apartados del ámbito de la producción, a expensas de una fuerza de trabajo decreciente. Se dice que los impuestos agrícolas que recaudan suelen no ser suficientes para pagar

a los burócratas que pululan por esas oficinas, de forma que los cuadros en ellas empleados exigen directamente sus salarios a los campesinos de su entorno. Otra carga sobre las familias campesinas proviene de la corrupción, en la medida en que los cuadros locales tratan de lucir sus «logros» o de enriquecerse poniendo en marcha proyectos de construcción o infraestructuras, sin considerar ni por un momento lo que significa para una economía campesina pagar la factura correspondiente. Algunos expertos están sugiriendo ahora la abolición total de los impuestos en metálico sobre la agricultura, para aliviar la carga que suponen «los siete institutos y cuatro organismos» sobre los hombros del campesinado.

En segundo lugar, los ingresos provenientes de la agricultura siguen siendo muy bajos, ya que el enorme tamaño de la población rural china hace imposible su modernización mediante economías de escala, al tiempo que los atrasados métodos de cultivo actuales han alcanzado virtualmente el límite de su capacidad productiva. La combinación de una sobrepoblación rural masiva con la limitación de la tierra cultivable es probable que haga casi imposible durante mucho tiempo aumentar los ingresos de los campesinos, que todavía constituyen el 70 por 100 de los 1.200 millones de chinos. Esta situación está motivando el desencadenamiento de serios conflictos entre los campesinos y las administraciones locales de las áreas rurales. Las tareas burocráticas asignadas a los cuadros locales entran en conflicto directo con los intereses de los campesinos. Cada año, la recolección del grano para los graneros estatales, la distribución de cuotas fiscales y la imposición de la política de un solo hijo provoca una oleada de incidentes. Los campesinos no gozan de un poder democrático garantizado. En los últimos años, los experimentos de elecciones comarcales han tratado de resolver este problema, pero en la mayoría de los casos sólo han dado lugar a un cambio aparente, no real. Sólo una minoría de poblaciones mantienen su trabajo administrativo abierto y transparente para el público. Muchos cuadros rurales cometen fraudes o corrupciones. Lo peor es que una porción considerable de los poderes administrativos ha caído en manos de tiranuelos locales. Los campesinos se ven acosados constantemente por esos matones rurales, como he mostrado en detalle en mi libro *The Pitfall of Modernization*.

En su conjunto, la clase obrera, los emigrados del campo a las ciudades y el campesinado comprenden unos 480 millones de personas, aproximadamente el 69 por 100 del total de la fuerza de trabajo¹⁰. Sean cuales sean las dificultades a las que se enfrentan, comparados con los grupos auténticamente marginalizados de la sociedad china al menos cuentan con un puesto de trabajo. Dado que su nivel de formación relativamente bajo no facilita la movilidad ocupacional, tener trabajo no es después de todo tan malo en una sociedad que está sufriendo un cambio estructural tan rápido, ya que en cualquier momento podrían caer en las filas de un grupo social que se enfrenta a situaciones mucho peores.

¹⁰ Yang JISHENG, «An Overall Analysis».

Una vasta población marginalizada

Se estima que el total de esta población marginada, es decir, desempleados y población rural pauperizada, alcanza los 100 millones de personas, en torno al 14 por 100 de la fuerza de trabajo total disponible¹¹. Con otras palabras, cerca de un 80 por 100 de la población china vive en los escalones más bajos o al margen de la sociedad. Esa distribución conduce inevitablemente a la inestabilidad social. Un estudio de 197 casos criminales en los que se han visto implicados jóvenes «en espera de empleo» (en lugar de admitir la existencia de desempleo, la RPCh ha creado esa locución, claramente expresiva de lo que se suelen denominar «rasgos específicos chinos») en la provincia septentrional de Jiangsu desde 1991 muestra las siguientes cinco características: (I) En su inmensa mayoría se trata de crímenes relacionados con la obtención ilegal de recursos; de los 197 casos, 60 eran de hurto, 24 de robo con violencia, 12 de fraude, 9 de secuestro, 5 de tráfico de droga, 26 de extorsión y 9 de prostitución; esto es, 145 casos que representaban el 70 por 100 del total. La conexión económica con la penuria de la población desempleada es evidente. (II) En el primer o segundo año de desempleo es donde se alcanza el momento de criminalidad más alto, especialmente entre los trabajadores despedidos de empresas mal dirigidas, con bajos salarios y grandes pérdidas. (III) La mayoría de los delincuentes son jóvenes trabajadores varones, de menos de 35 años, a los que se achaca el 80 por 100 de los crímenes en cuestión. (IV) Esos delincuentes no contaban con una formación o habilidades especiales antes de quedarse sin trabajo, y aunque su nivel de formación es más elevado que la media campesina, está todavía muy por debajo de las exigencias de una sociedad moderna. (V) Dada su experiencia previa en el trabajo colectivo en la línea de producción, los trabajadores despedidos son reclutados por bandas criminales en proporción muy superior a la de los campesinos. Entre los acusados en esos 197 casos, casi la cuarta parte estaban implicados en «crímenes organizados», al servicio de más de una docena de jefes de bandas organizadas¹².

Este análisis tiene implicaciones generales, porque los factores que originan el despido de trabajadores de empresas públicas son claros. Conforme se va reestructurando progresivamente el sistema económico, las empresas equipadas con una tecnología atrasada van siendo poco a poco eliminadas, mientras que los nuevos sectores industriales requieren una fuerza de trabajo mucho más cualificada. Los trabajadores despedidos de las actuales empresas públicas y la fuerza de trabajo rural que nunca ha recibido una formación profesional nunca podrán abrirse camino en esos sectores de tecnología intensiva. El resultado va a ser un desempleo estructural que toda una generación (principalmente los que tuvieron que abandonar los centros de estudio en los años de la Revolución Cultural) tendrá que afron-

¹¹ *Ibid.*

¹² Liu ZHONGFU y Zhang QIGHONG, «A Preliminary Analysis of 197 Criminal Cases Involving «Off-Post» Workers», *Studies of Crime and Re-education*, núm. 5, 1997.

tar; un problema estrechamente relacionado con el perfil demográfico de la sociedad china y la ilimitada oferta de trabajo no cualificado en el país. Hay gente que arguye que al incorporarse a la OMC se crearán en China 10 millones de puestos de trabajo, lo que aliviará los dolorosos niveles actuales de desempleo. Esas predicciones son como mucho medias verdades, ya que las nuevas oportunidades de empleo sólo estarán a disposición de quienes dispongan de cierta cualificación y formación profesional.

En los medios se leen con frecuencia comentarios afirmando que el problema real es que los trabajadores desempleados se han echado a perder y son demasiado melindrosos para los puestos de trabajo que tienen a su alcance. Eso puede ser cierto en algunos casos, pero no en general. Otros llegan a teorizar que esa situación es normal en cualquier transición social, que siempre requiere que algunos grupos sociales paguen más por el progreso que otros. De ahí se deduce que los trabajadores desempleados deben sacrificarse por el bien del país. Si bien esos argumentos no están desprovistos de fundamento, se acomodan mal con el hecho de que este doloroso período no terminará hasta que toda una generación haya desaparecido de la historia, y de que la población china haya alcanzado una tasa de crecimiento nula o incluso negativa. Además, en el futuro habrá un problema aún peor, que originará más sufrimiento social. El aumento en las tasas escolares hará muy difícil a los padres de las clases sociales más bajas enviar a sus hijos e hijas a la escuela, por no hablar de los estratos marginales. Sin embargo, estos dos grupos son los que poseen una tasa de natalidad más alta. Si se pretende reducir la desigualdad de oportunidades educativas para las futuras generaciones, hay que tomar ahora medidas para detener la transmisión de la pobreza de generación en generación.

Criminales errantes

El gran número de campesinos errantes en las ciudades chinas y en torno a las aldeas es también una fuente de varias formas de criminalidad en la RPC actual. La mayoría (más del 75 por 100) de los criminales en grandes ciudades como Pekín, Guangzhou y Shenzhen son marginados no residentes. Algunos investigadores muy preparados han realizado estudios locales de este fenómeno, del que ofrecen análisis detallados y poco conocidos. Por ejemplo, un funcionario de la prisión de Jurong (Jiangsu) estudió los casos de los 202 presos a su cargo, resultando tres rasgos demográficos de esos delincuentes rurales: la mayoría (el 64,5 por 100) estaban solteros; muchos (el 59 por 100) tenían antecedentes criminales; y no pocos de ellos (el 16,5 por 100) habían estado ya en la cárcel anteriormente. Sus delitos mostraban el paso del crimen oculto e individual al abierto y organizado: de hurtos a atracos, y de acciones aisladas a operaciones de bandas, en particular robos con violencia, atracos a mano armada y vandalismo en los que participaban varias personas. Esos grupos criminales poseen su propia organización, plan de acción, distribución de tareas y cuotas, receptadores para los artículos robados, y reglas para dividir el

botín. Una característica destacable de esta criminalidad rural es su utilización de habilidades o dispositivos especializados para violar la ley. Por ejemplo, los conductores de autobús familiarizados con determinados itinerarios contribuyen a la organización de repetidos asaltos a sus vehículos para atracar a los pasajeros; los mecánicos de los talleres de reparación roban o modifican piezas sustanciales de las motocicletas que les llegan; los cerrajeros abren las casas para saquearlas, etc.

El descubrimiento más importante de ese estudio, no obstante, es el cambio de motivación para la criminalidad campesina en los últimos años. Antes, muchos campesinos presos mostraban claros signos de desequilibrio psíquico, que les había llevado a transgredir la ley sin un propósito deliberado de desafiarla. En cambio, la mayoría de los detenidos después de 1996 había cometido sus crímenes con la intención consciente de violar la ley y desafiando las prohibiciones morales: «Puesto que otras personas están disfrutando de una vida opulenta –decía uno de los presos– yo, que me veo solo y pobre, debería poder hallar algo de estímulo y relajación. Aunque eso signifique cometer un delito, es mi única posibilidad de experimentar algo distinto en mi vida». El autor comenta:

Muchos jóvenes del campo, que sufren una extrema pobreza y ansían hacerse ricos, han entendido la economía de mercado de una forma muy subjetiva e irracional, sin comprender sus valores e identificándolos simplemente con el dinero y la diversión. Una vez que su visión de los valores sociales se trastorna, lo mismo sucede rápidamente con su sentido del bien y el mal. La codicia se convierte en «felicidad», el matón de la mafia en un héroe y la falta de gusto en «diversión». Todas esas inversiones normativas están interrelacionadas y operan de modo interactivo, orientando la conducta criminal en las direcciones correspondientes.

Con un lenguaje algo diferente, un informe de Zhang Nanyan, de la dirección de la Oficina de Prisiones de la provincia de Henan extrae conclusiones parecidas de la criminalidad rural¹³.

Organizaciones criminales

La población migratoria flotante en China ha dado lugar a muchas bandas criminales, siendo el tipo más extendido el de la «sociedad secreta», organizada a escala provincial, de ciudad, comarcal o de pueblo. Ejemplos relativamente bien conocidos que han atraído sobre sí la represión son «la banda de Xinjiang» en Shanghai, las bandas «de Pekín» y «Tiburón Blanco» de Guangdong, la «banda de Ganzhou» en Jiangxi, y la del «Lobo» en Shanxi. Esas organizaciones criminales, compuestas por trabajadores industriales, campesinos o jóvenes «en espera de empleo», aparecen ligadas por lazos de amistad personal. Algunas de ellas cuentan con estructuras verticales muy

¹³ Shi XIUGUI, «An Investigation of Crimes Committed by Rural Youth Arrested during the Crack-Down Campaign», *Studies of Crime and Re-education*, núm. 7, 1997.

definidas, con una jerarquía formal y reglas disciplinarias estrictas, que a menudo simulan relaciones de parentesco para cimentar la red organizativa. Otros tipos están basados en vínculos clánicos reales, o en conexiones profesionales¹⁴. El creciente número de desempleados proporciona un enorme «ejército de reserva» para el reclutamiento de esas bandas. Se puede predecir que éstas desempeñarán en el futuro un papel creciente en la vida social china. La experiencia histórica, tanto en nuestro país como en otros lugares del mundo, sugiere que aun el Estado más autoritario es más clemente con sus ciudadanos ordinarios que la sociedad secreta más abierta.

Asociaciones intermedias

Las sociedades modernas se caracterizan normalmente por la participación social de múltiples grupos en la determinación de las políticas públicas a seguir. Cada clase social suele tener sus propios canales para proteger o ampliar sus intereses. Esto es particularmente cierto en lo que se refiere a las clases medias, que con frecuencia median o negocian entre las clases superiores e inferiores, papel que depende a su vez de la existencia de distintas asociaciones intermedias. La debilidad de las capas medias en China determina la debilidad de tales organizaciones, la mayoría de las cuales no provienen, en realidad, de las presiones interesadas de los estratos de renta superior o media. Antes del período de reformas, todas las organizaciones sociales estaban sometidas a un estricto control del Estado. A comienzos de la década de 1960 existían más de un centenar de asociaciones representadas en todo el país, y más de seis mil asociaciones locales, hasta que se vieron paralizadas por la Revolución Cultural. Con el inicio de las reformas comenzaron a revivir y en junio de 1996 había más de 1.800 registradas a escala nacional y cerca de 200.000 locales¹⁵. Algunas de ellas fueron puestas en pie por iniciativa del partido o del gobierno, para ajustar el control de determinados sectores sociales o económicos, como la Asociación de Empresas Privadas, por no hablar de la ACAEC. Otras se han formado desde las empresas, en particular las organizaciones profesionales como la Asociación de Diseño de Moda o la Asociación de Decoración Interior. Otras son hermandades o asociaciones de alumnos.

Con excepción de este último tipo, que son de carácter decididamente no oficial, las demás operan de una forma «semioficial, semicivil», bajo el atento ojo del gobierno. Los dirigentes de esas organizaciones intermedias (incluida la Asociación de Empresas Privadas y la Asociación de Auto-Empleados) son todos ellos nombrados por el Estado y se les paga como funcionarios civiles. Esas asociaciones acostumbra a tener una doble función: frente al gobierno representan a sus afiliados y frente a éstos representan al gobierno. Cualquier organismo, en efecto, ocupa dos posiciones. El Estado, por su parte, ha racionalizado su administración en este área. De 1976 a 1988 reinó la confusión, ya

¹⁴ Lei DONGWEN, «Organizational Features of Mafia-Style Underground Social Groups», *Zhanjiang Normal College Research Journal in Philosophy and Social Sciences*, núm. 4, 1996.

¹⁵ Wu ZHONGZE y Chen JINLUO, *Managing Social Organizations*, Pekín, 1996.

que no había procedimientos unificados para registrar o controlar las organizaciones sociales, hasta que el Consejo de Estado encargó al Ministerio de Administraciones Públicas que pusiera orden en esa situación. Tras la primavera de 1989 el gobierno comprendió la importancia de controlar estrechamente este terreno, y elaboró nuevas regulaciones para el registro y administración de las organizaciones sociales, estableciendo sobre ellas una doble capa supervisora. Todas las organizaciones sociales tuvieron desde entonces que aceptar un sistema dual de control, uno de la Oficina de Registro y Administración, y otro del ministerio concreto al que correspondían las actividades de la asociación en cuestión. En 1998 esas regulaciones se reforzaron para eliminar las lagunas jurídicas que pudiera haber en ellas.

Un ejemplo típico de esta situación son las llamadas «tres *shi*»: la Asociación de Contables, la de Auditores y la de Abogados. Dado que las tareas profesionales de contables y auditores se solapan en muchos aspectos, las dos primeras se fusionaron en un solo organismo en 1997. Teóricamente, los auditores y contables son los garantes de la confianza pública en las operaciones de cualquier empresa, mientras que los abogados defienden los intereses de sus clientes, que evidentemente no son los mismos que los de los tribunales. Sin embargo, las relaciones entre esas dos grandes organizaciones y el gobierno dan una idea fiel de la situación de las asociaciones intermedias en la China actual. Los abogados tienen muy mala reputación en la sociedad china, ya que el resultado de los pleitos ante los tribunales no suele depender de la verificación de eventuales violaciones de la ley, sino más bien de lo hábil que sea el abogado, y sobre todo de lo estrechas que sean sus conexiones con el tribunal que juzga el caso. En la profesión existe un dicho: «intervenir en un proceso significa aprovechar las conexiones que uno tiene». Es corriente escuchar a los abogados promocionar sus servicios ante los clientes diciéndoles lo amigos que son de determinado juez. La colusión entre abogados y jueces en un proceso está lejos de ser algo desacostumbrado en China. Incluso hay casos en los que el mismo abogado actúa como representante tanto del demandante como del demandado. La opinión pública tiene en muy baja estima a la profesión legal.

La situación de la Asociación de Contables posee características propias. Hoy en día, cuando una empresa china prepara sus cuentas anuales, el directivo de una fábrica está a punto de dejar su puesto, o una empresa estatal quiere cambiar su estructura accionarial o realizar una oferta pública de acciones en el mercado de valores, la empresa o el ejecutivo en cuestión deben presentar un informe auditado por un contable oficialmente registrado. Usualmente la auditoría no se realiza para mejorar la gestión interna o modernizar la estructura del capital, sino para cumplir con una formalidad administrativa. Así pues, lo que la empresa o el ejecutivo buscan no es el cumplimiento de una norma de regulación contable, sino una flexibilidad individual que deje a un lado la ética profesional. Si una firma auditora no puede satisfacer las demandas pragmáticas de sus clientes perderá el contrato. Las intensas presiones competitivas y la ausencia de sanciones disciplinarias en la profesión aseguran así la elaboración por parte

de algunas auditoras de balances de situación falsificados. Los resultados son llamativos. En 1998 se advirtió, intervino, multó, se revocaron sus licencias temporalmente, se confiscaron sus ganancias ilegales, o se disolvió definitivamente, a un total de 478 asociaciones contables en todo el país. No menos de 103 firmas y aproximadamente 1.000 oficinas fueron cerradas, y más de 5.000 empleados despedidos¹⁶. La profesión de contable paga un precio mucho más alto por las prácticas ilegales que los abogados, siendo el castigo más severo y más frecuente. Su reputación es ahora tan baja que cuando una empresa del país hace una oferta pública de acciones en un mercado de valores extranjero se considera inaceptable un balance de situación que sólo haya auditado una firma contable local. Esa mala reputación ha obligado a la profesión a cierto examen de conciencia. Pero si el entorno social que «obliga a las mujeres corrientes a la prostitución» no cambia, es poco probable que esa reflexión interna aporte una mejora sustancial a la ética profesional de la contabilidad china.

Sin embargo, aunque las organizaciones sociales son en general todavía incapaces de defender los intereses de aquéllos a quienes se supone que representan o de participar en la elaboración de las políticas públicas y poseen poco poder de negociación frente al gobierno, han creado cierto «espacio de solapamiento» en la vida social china, reconocido tanto por la sociedad como por el Estado, y esto es algo nuevo. Si no se produce una interferencia política mayor, su papel en el desarrollo futuro del país se hará cada vez más importante, ya que en ellas se da el potencial para una esfera pública, tallada a partir del férreo bloque de la vida social china, en la que los ciudadanos pueden participar en actividades voluntarias y no obligatorias.

Los riesgos de la polarización

Al comienzo de las reformas la mayoría de los intelectuales chinos imaginaban que China estaba entrando en la vía de una sociedad de clases medias. Esto, según se creía en general, aportaría estabilidad social, ya que –así se argumentaba– las clases medias actúan como un amortiguador entre las clases superiores y las inferiores, mitigando los conflictos entre ellas, y proporcionando estabilidad política; difunden una perspectiva moderada, conservadora, enemiga de las doctrinas extremadas o radicales, lo que facilita la estabilidad ideológica; y su estilo de vida está dominado por el consumo, lo que proporciona, cuando se convierten en mayoría en cualquier sociedad, un vasto y continuo mercado de consumo, asegurando la estabilidad económica. El desarrollo de la empresa privada, la redistribución de la propiedad estatal y la introducción del accionariado fomentaba grandes esperanzas de que se produjera una evolución así. El hecho de que todavía hoy haya miembros de la elite intelectual que consideren la

¹⁶ «One Hundred Registered Accounting Offices and Nearly a Thousand Branch Offices Closed Nationwide-Bringing the “Economic Police” to Book», *Pekín Youth Daily: Weekend Supplement*, 14 de agosto de 1998.

corrupción como un fenómeno benigno, que ayuda a derribar la vieja economía, atestigua la fuerza de esas opiniones.

La realidad ha desmantelado sin embargo estas ilusiones. Desde el momento en que se iniciaron las reformas con una intrusión del poder político en el mercado, se ha producido una aguda polarización social. China no sólo ha fracasado en el desarrollo de una distribución de la renta leptocúrtica, con una gran clase media en el centro, sino que se ha desplazado hacia su opuesto, una estructura social piramidal parecida a la de América Latina o a la de países del Sureste asiático como Tailandia o Filipinas. Una pequeña minoría se eleva sobre una enorme masa de estratos deprimidos o marginalizados, que abarca a más del 80 por 100 de la población, con una clase media cuantitativamente subdesarrollada entre ellas. La experiencia de la modernización en otros lugares indica que la educación superior es la palanca principal para producir una clase media, una de cuyas funciones es la de inculcar normas de comportamiento convencionales, esto es, de clase media. Pero quienes reciben esa formación superior en China constituyen una porción muy pequeña de la población total. El país todavía carece de los medios para producir una clase media abundante.

La polarización social puede constatarse en el modelo de desarrollo urbano. Como hemos dicho, muchas de las ciudades chinas grandes o medianas cuentan ahora con barrios ricos, a menudo vigilados por sistemas de seguridad muy avanzados. El consumo también está muy estratificado. Los comercios especializados venden a los ricos productos muy sofisticados, mientras que las casetas callejeras ofrecen mercancías baratas a los pobres. El poder político comercializado redistribuye la riqueza hacia arriba, a una elite que se viene reproduciendo durante generaciones. Los miembros de las clases medias o bajas son muy conscientes de los mecanismos de desposesión y explotación. El fenómeno más obvio es el contraste entre la suerte de los directivos y la de los trabajadores cuando una empresa pública quiebra. Los trabajadores se ven en la calle sin la menor compensación, mientras que un antiguo ejecutivo o directivo de una fábrica nunca cae en el mismo pozo de pobreza. Por el contrario, a menudo el comprador de los activos residuales de la empresa le ofrece un puesto, no por sus habilidades como gestor, sino por su cooperación en la liquidación de la propiedad pública. Esos jefes muestran tendencias antisociales cada vez más fuertes. El resultado es un aumento de los incidentes terroristas, ataques físicos a los ricos, paros o sabotajes en las empresas públicas, manifestaciones todas ellas de un conflicto de clase. La gravedad de la tensión social puede medirse por la creciente tasa de criminalidad, incluyendo el número de asesinatos.

La selección de cuadros

Las raíces de los problemas actuales de China residen, entre otros factores, en la plaga de una selección de cuadros atrasada y anacrónica. Durante

mucho tiempo no se ha dispuesto de una base racional para la selección de funcionarios; no existe un sistema de exámenes ni un mecanismo democrático abierto. El engaño rodea todo el proceso mediante el que los dirigentes «descubren» un talento, los ministerios «se hacen cargo» de la gente más dotada, o lo que es aún peor, un jefe del partido elige a determinado «sucesor». Estos modelos generan fácilmente la corrupción; al basarse los nombramientos en las conexiones personales los incompetentes no pueden ser despedidos, y los puestos se ofrecen incluso a la venta. No hace mucho tiempo los medios de comunicación expusieron el caso de un secretario comarcal del partido que había vendido más de doscientos puestos durante su mandato, y se trataba tan sólo de un ejemplo. La sucesión ininterrumpida de casos de corrupción y abusos de poder por parte de cuadros que actúan como tiranos locales sólo representa una pequeña parte del problema, ya que la mayoría de los casos nunca llegan a ser conocidos por la opinión pública. Si se les juzga por su comportamiento, se trata de mandatarios de muy baja calidad. En general, una elite política no sólo debe mostrarse competente en cuanto a la administración social, sino que debe ser capaz de tener en cuenta los intereses de otras clases distintas de la propia, aunque sólo sea para proteger su situación a largo plazo, permitiéndoles cierta participación en la distribución de los recursos comunes. La actual elite en el poder en China, por desgracia, no sólo es incapaz de pensar en los intereses de otras clases sociales, sino que ni siquiera piensa en los intereses a largo plazo de su propia clase. Su mentalidad queda claramente expresada en el adagio: «hay que aprovechar el poder antes de su fecha de caducidad». Los puestos a los que la gente se refiere como «dorados» son inseparables del fraude y la corrupción. Esos burócratas saben como cualquier otro que el país no tendrá futuro por esa vía. Por eso, aunque repiten en voz alta que «lo mejor es la China socialista», se esfuerzan, utilizando cuantos canales se les presentan, por enviar a su hijos al extranjero.

La elaboración de los planes políticos revela actualmente una característica que difiere del modelo vigente en las dos últimas décadas. Cada vez son más corrientes los planes económicos que no están basados en consideraciones de interés general, sino destinados a beneficiar a un grupo social específico. Cuestiones críticas para la economía nacional como la reestructuración de los sectores industriales desequilibrados o el saneamiento de las deudas incobrables en el sistema bancario siguen sin resolver, ya que abordarlas afectaría a los intereses de algunos miembros de la elite política o económica. La producción de automóviles familiares, excedentaria con respecto al tráfico que las infraestructuras existentes pueden soportar, sigue «desarrollándose» debido a la concesión de favores especiales. La construcción de inmuebles está fuera de control, paralizando a los bancos con un enorme volumen de créditos fallidos, pero parece imparable. En un momento en que todo el mundo sabe que el poder de compra de los chinos es todavía muy bajo, el parloteo acerca de alojamientos asequibles para las familias urbanas nunca se ve seguido por la acción, ya que apartamentos más baratos podrían dañar intereses creados. Medidas que apaciguarían

el descontento social, como la prohibición del uso de vehículos públicos para fines privados, la reducción de los banquetes oficiales, impedir la recaudación no autorizada de «tasas» a los campesinos, etc., a menudo se convierten en mero papeleo en continuo tránsito de una oficina a otra. Por el contrario, las políticas que aprovechan el poder público para favorecer los intereses de la elite, como las diseñadas para facilitar los despidos y recortar prestaciones sociales en una época de depresión económica, aliviando la carga del Estado a costa de incrementar las tensiones sociales, se deciden y ejecutan con una determinación digna de mejor causa.

Quizá el ejemplo más típico de aplicación de este modelo tuvo lugar a principios de 1999, en un momento en que los pronunciamientos oficiales alentaban al alza el mercado bursátil sin ninguna restricción, ayudando a ciertos grupos de interés a levantar un mercado deprimido con el estímulo de fondos públicos y créditos bancarios. Una vez que el mercado se vio artificialmente inflado, esos grupos vendieron rápidamente sus activos dejando que los pequeños jugadores ordinarios corrieran con todas las pérdidas. Prácticas como ésta son claramente incompatibles con la estabilidad a largo plazo del país, sirviendo únicamente para que los nuevos ricos aumenten rápidamente su fortuna. La prosecución de esa política suicida en China confirma la miopía de una elite política e intelectual que ha perdido su confianza en el futuro del país que llevan entre manos. El gobierno de la RPCh ha optado entre la elite y la mayoría del pueblo. Si lo ha hecho así, la razón no está solamente en la sesgada base social del partido gobernante, sino en un deslizamiento más general hacia una «sociedad orientada hacia el mercado». El navío llamado China se está hundiendo bajo los denodados esfuerzos de una elite de poder que lleva mucho tiempo preparando el retiro para los miembros de su familia. Cuando ya no sea posible convertirse en un cuadro del PCCh será el momento para un confortable retiro en el extranjero.

Los medios de comunicación

Los medios de información chinos siempre han estado bajo el control centralizado del Estado. Desde el período de reformas ese control se ha relajado, abriendo mayor espacio a la gestión independiente. Pero todos los canales siguen estando en última instancia bajo el control del gobierno. Todavía no está permitido legalmente que individuos o empresas operen libremente en el sector editorial. Por otra parte, como el gobierno ha pedido a algunos periódicos que busquen sus propios recursos financieros, diciéndoles que «arrostren sus riesgos en la economía de mercado» —lo que los editores han descrito como «átense brazos y piernas y arrójense al mar»—, muchos editores se han visto obligados a dirigir su atención a los consumidores, teniendo no obstante cuidado de no ofender al gobierno. En consecuencia se da una diferencia económica entre un periódico del partido y un periódico de masas. El primero se financia con fondos públicos y no puede permitirse ser innovador, ya sea en la línea editorial o en los reportajes: está obligado a ser obe-

diente. En cuanto al segundo, tiene que sobrevivir de sus ventas, lo que significa que debe procurar ser popular y entretenido.

Sin embargo, aunque hay publicaciones que incluyen ocasionalmente críticas relativamente atrevidas del *statu quo*, siguen estando permanentemente vigiladas por las autoridades, que con frecuencia les hacen llegar una «tarjeta amarilla» de advertencia. En los últimos años, cuando la situación económica no era muy alentadora, el gobierno reforzó el control sobre los medios de comunicación. Paradójicamente, en esa mismo época las empresas privadas comenzaron a comprar en secreto ciertos periódicos y revistas. Las operaciones de este tipo no se pueden registrar o reconocer oficialmente; el trato suele sellarse mediante un contrato privado firmado por la empresa compradora, por un lado, y la unidad productiva encargada de la publicación comprada, por otro. Ambos quedan así obligados por el acuerdo privado. El riesgo recae principalmente sobre el comprador, ya que si el gobierno descubre el trato o la otra parte lo rompe la empresa tiene que cubrir las pérdidas. La actual reorganización de los medios de información podría originar otra redistribución de los recursos en este sector, cuyos resultados quizá lleguen a ser muy diferentes de los pretendidos. Otro desafío al gobierno es, por supuesto, el proveniente del progreso tecnológico. La extensión de Internet, que se ha hecho popular en la generación de menos de 35 años, constituye una alteración de los medios de comunicación que plantea un serio desafío a los controles oficiales y hace probable que los días en que los medios chinos quedaban completamente a merced del gobierno sean pronto cosa del pasado.

La incorporación a la OMC

La petición de China de incorporarse a la OMC ha atraído la atención de la opinión pública china en todo el mundo, llevando a todo tipo de predicciones sobre su impacto. Algunos autores muy influyentes han expresado opiniones ultraoptimistas, llegando a afirmar que en cuanto se produzca esa incorporación las empresas multinacionales obligarán a China a aceptar las reglas del juego y ayudarán así a erradicar la corrupción. Ese pronóstico ignora ciegamente la experiencia. La mayoría de los países de América Latina y el Sureste asiático pertenecen a la OMC, pero siguen sufriendo una corrupción creciente. Particularmente en América Latina, el régimen típico ha sido durante muchos años una dictadura política, aliada con monopolios domésticos y con el capital extranjero. ¿Cómo podría suceder entonces que cuando la OMC tiene todavía que combatir la corrupción en otros lugares, vaya China a disfrutar de ese efecto mágico en cuanto se una a ella? En lo que se refiere a esta cuestión, por fuerte que pueda ser Estados Unidos, cuando sus empresas multinacionales lleguen a China tendrán que seguir el ejemplo local y jugar con las reglas chinas si quieren su parte en los beneficios. Si pensamos hasta qué punto se ha convertido China en una «sociedad orientada hacia el mercado» y en el comportamiento en el pasado del capital extranjero para conseguir los permisos que le abrieran las puertas de China, debería estar claro que tendremos que emprender la batalla contra la corrupción con nuestras propias fuerzas.

De lo que podemos estar seguros es de que la entrada de China en la OMC acelerará su rápida polarización social. Si el conocimiento funcional de la economía de mercado puede considerarse como una especie de capital, y las conexiones sociales como cierto tipo de recursos, quienes poseen esos activos estarán bien situados para sacar todas las ventajas de las oportunidades que ofrecerá la pertenencia de China a la OMC, y en cualquier caso mucho más que quienes no los poseen. Hablando eufemísticamente, los primeros están preparados para la gran aventura, y los segundos no. Lo mismo se puede decir del foso existente en términos del desarrollo regional en el interior de China. Las provincias más ricas contarán con los recursos y el capital necesarios para aprovechar las oportunidades ofrecidas por la pertenencia a la OMC, y las pobres no. La elite política descubrirá pronto el mejor modo de cooperar con el capital extranjero. La elite intelectual se dividirá aún más en cuanto algunos de sus miembros pongan al día la clientela a la que sirven. La elite económica actual tendrá que afrontar una situación más complicada. Los sectores con pocas posibilidades de asociarse al capital extranjero corren el riesgo de verse barridos en una competencia abierta con las multinacionales (la industria de las telecomunicaciones ya se ha expresado acerca de ese peligro). Las ramas y empresas que cuentan con cierta cuota de mercado y una reputación establecida optarán muy probablemente por la colaboración con el capital extranjero para recortar los costes de la competitividad. El capital extranjero estará encantado de colaborar. Por otro lado, las pequeñas y medianas empresas, especialmente las «municipales y de pueblo» que sólo puedan ofrecer servicios técnicos de bajo nivel y que se han mantenido con vida gracias a las elevadas ayudas públicas, probablemente tendrán que cerrar al poco tiempo de la incorporación a la OMC. Sin políticas que contrarresten esas consecuencias, el resultado de la incorporación de China a esta organización consistirá inevitablemente en alimentar el explosivo enriquecimiento de la clase dominante y en marginar aún más a las clases intermedias e inferiores.

En la China actual se ha desarrollado una estructura social muy diferente a la que existía antes del período de reformas. Pero ésta ha ido emergiendo gradualmente, sin una ruptura radical con el pasado, transformándose los que ya eran poderosos antes en un nuevo tipo de elite. El elemento más crucial ausente en esta sociedad es la existencia de cualquier tipo de movimiento social. Los únicos movimientos perceptibles en la China actual son los demográficos, esto es, las migraciones. Un país con movimientos sociales posee un mecanismo para reflexionar sobre sí mismo y reajustarse, ya que éstos representan siempre un esfuerzo colectivo para descubrir los perfiles y normas de una nueva vida. Juzgando con ese criterio las dos décadas de reformas en China, tan sólo a mediados y finales de la década de 1980 hubo señales de un movimiento social embrionario. Para resolver los problemas de la China actual, lo que se necesita es un movimiento social enteramente nuevo, capaz de afrontar una reforma completa tanto de las ideas como de las instituciones.

New York Times, 2 de julio de 2000

Comunistas de la vieja guardia enfrentados con el Partido en China

Elizabeth ROSENTHAL

SHENYANG, China.— Durante más de cuarenta años Zhou Wei disfrutó del éxito como cuadro del Partido Comunista en organismos del gobierno y empresas públicas, siendo el tipo de funcionario leal cuyo duro trabajo mantuvo funcionando los engranajes de la industria socialista en China. Sus colegas y su familia afirman que era un tipo brillante, si bien algo hurano, que amaba —y sigue amando— al Partido. Pero hoy día se encuentra en un campo de trabajo, acusado de organizar asambleas ilegales y de incitar a la revuelta en esta deprimida ciudad industrial. Desde mediados de la década de 1990 Zhou, que ahora tiene 69 años, había encabezado a miles de respetados viejos cuadros comunistas de Shenyang en una creciente serie de protestas y campañas de peticiones contra el gobierno local, denunciando acremente su corrupción y su dejadez hacia los campesinos, trabajadores y jubilados que se había comprometido a servir. Ahora, una campaña para conseguir la liberación de Zhou ha revelado a la opinión pública una extraordinaria lucha de cinco años entre el partido local y algunos de sus dirigentes más antiguos, un extravagante conflicto en el que la policía persigue a ancianos héroes de la revolución de 1949 que llevó a su partido al poder. Pero más que eso, refleja la desilusión generalizada del pueblo con respecto a los perdidos ideales de un Partido Comunista corrupto, incluso entre sus militantes de base. Y demuestra la erosión de la credibilidad del partido y de su monopolio del poder en un país cuyos ciudadanos tienden cada vez más a expresar abiertamente sus ideas.

En esta ciudad de castigadas empresas públicas, las protestas de los trabajadores en demanda de salarios impagados son tan frecuentes que los bloqueos de carreteras se anuncian en los noticieros de la mañana. Pero las quejas de los cuadros veteranos van más allá: «Al detener al camarada Zhou Wei se nos ha ofendido a todos los viejos cuadros —dice Zhang Jingcai, un anciano de aspecto juvenil a pesar de sus 70 años, sentado al borde de una silla plegable—; yo amo todavía con fervor al Partido Comunista Chino, pero aborrezco a sus elementos corruptos. El prestigio del partido no es muy alto entre la gente corriente hoy día, y eso nos entristece mucho a los viejos cuadros». El muy leal Sr. Zhou, con impecables credenciales revolucionarias, se convirtió en una especie de Robin Hood, un acérrimo miembro del partido de vida sencilla, que se alzó por los obreros, campesinos y viejos comunistas arrinconados en la precipitada carrera emprendida por China para remodelar su economía socialista.

Zhou Wei se unió al Ejército de Liberación Popular en 1947, cuando tenía 16 años, e ingresó en el Partido en 1949. Durante la década de 1980 fue distinguido como trabajador modelo. Él y su familia vivían modestamente en un piso sin ascensor. «Los campesinos y obreros de las fábricas también están preocupados por Zhou Wei —nos dice Yuan Changzhi, de 72 años, otro dirigente jubilado—, le adoraban y le llamaban “la estrella de los viejos cuadros”, porque luchaba por la justicia para todos». Zhou Wei comenzó a organizar protestas en 1995, por razones de orden muy práctico: el gobierno de Shenyang había dejado de pagar a los 20.000 viejos cuadros de la ciudad sus pensiones de jubilación legalmente garantizadas. Miembros incondicionales del partido durante mucho tiempo se veían ahora sin sus pensiones y sin seguro médico en una época en que algunos líderes locales del partido se estaban construyendo villas y conduciendo Audis. Se rebelaron. En los tres años siguientes Zhou Wei, megáfono en mano, encabezó a grupos de cuadros jubilados hasta las oficinas del gobierno en Shenyang y en Pekín, donde se manifestaron y entregaron sus peticiones por escrito. Con el tiempo sus jubilaciones habían crecido, de unos 25 dólares mensuales en 1996 hasta unos 115 dólares actualmente, pero seguían quejándose de sus condiciones de alojamiento y de las escasas prestaciones médicas. Con el tiempo también comenzaron a ocuparse de otros problemas, ayudando a los campesinos cuyas tierras habían sido ilegalmente expropiadas por el gobierno de Shenyang y defendiendo la causa de aquellos de sus paisanos que habían perdido sus ahorros cuando un banco privado con estrechos lazos con importantes funcionarios locales se declaró en quiebra bajo el peso de la corrupción.

La orden de los líderes locales del partido en 1998 que privaba a Zhou de su pertenencia al mismo afirma que desde octubre de 1994 hasta junio de 1998 había organizado 119 manifestaciones para presentar diversas reivindicaciones al gobierno, en las que habían partici-

pado unas 17.000 personas. Las manifestaciones en las ciudades chinas son cada vez más corrientes y algunas son ilegales, dicen los viejos cuadros, pero insisten en que ellos siempre siguieron los procedimientos establecidos. «Todos esos viejos cuadros son antiguos líderes de las fábricas y dirigentes del partido, por lo que conocen todas las normas –nos dice la esposa de Zhou Wei, Zhao Yan, mujer de aspecto frágil vestida con una bata de casa estampada–. La policía de tráfico incluso elogiaba a los viejos cuadros por manifestarse de forma tan ordenada, y no como muchos otros aquí, que bloquean las calles y cosas así». Quizá más amenazador para los funcionarios locales, no obstante, era el hecho de que los viejos cuadros se decidieran a investigar la corrupción local y no se acobardaran cuando el rastro que seguían les llevó hasta lo más alto. «No íbamos a ciegas –dice Zhang Jingcai–; atendíamos a los llamamientos de la dirección del Partido a acabar con la corrupción».

Pero conforme se intensificaban sus esfuerzos, lo mismo sucedía con el acoso policial al que se veían sometidos. El teléfono del Sr. Zhou fue intervenido desde años antes de su detención, y cuando los viejos cuadros se reunían los domingos en el parque, docenas de policías se acercaban a escuchar. En mayo de 1998, Zhou Wei y su grupo viajaron a Pekín para denunciar que un teniente de alcalde de Shenyang, Ma Xiangdong, estaba implicado en una operación de especulación urbanística que había expropiado ilegalmente las propiedades de miles de campesinos. A su regreso fue detenido y encarcelado durante dos semanas por la Oficina de Seguridad Pública de Shenyang y expulsado del Partido. En cuanto a Ma Xiangdong, ahora se encuentra en prisión a la espera de juicio acusado de corrupción. Sin arredrarse, Zhou y sus colegas jubilados hicieron en abril de 1999 otro viaje a Pekín, esta vez al Ministerio de Seguridad Pública, para desenmascarar al banco de Shenyang que había defraudado a miles de impositores cerca de 1.000 millones de dólares. Y a principios de mayo de 1999 estaban preparando un informe sobre un alto funcionario de la administración de materiales de construcción de Shenyang, que según ellos se había quedado con 40 millones de dólares.

Pero no tuvieron la oportunidad de presentarlo. A las 8 de la mañana del día 6 de mayo cinco coches de policía que transportaban a más de 20 oficiales se detenían frente al gris edificio de apartamentos donde vivía Zhou Wei, según cuenta su familia. Lo detuvieron, llevándose sus archivos, sellos, útiles de escritura y sus libros de leyes. Al día siguiente fue enviado a un campo de trabajo por dos años, sentencia que puede imponer la policía sin pasar por un tribunal. Zhou Wei nunca había sido juzgado ni condenado. «Toda su vida sirvió a la revolución, y ahora se ve perseguido», nos dice su mujer. Los documentos por los que se expulsaba a Zhou Wei del partido y que llevaron más tarde a su encarcelamiento le acusan esencialmente de no contemporizar. «Zhou Wei debería haber servido como ejemplo de observancia de la disciplina del partido, protegiendo conscientemente su imagen así como una situación política estable y unificada», dice el comunicado de la expulsión. Pero en la China de hoy incluso a los cuadros fieles que «vertieron su sangre por la revolución» les repugna la idea de que la lealtad hacia el partido signifique una ciega aceptación de sus malandanzas y sobornos. «He pertenecido al partido durante más de 50 años y nunca he visto algo como esto –dice Li Baocai, un encanecido anciano de 82 años–. Estoy absolutamente en contra de la detención de Zhou Wei y de que le traten así. No puedo aceptar la idea de que no deberíamos haber intentado resolver ese tipo de problemas. Los viejos cuadros hemos tratado de resolverlos porque creemos en el partido y en el gobierno». Desde su detención, los viejos cuadros que trabajaban con Zhou Wei han mostrado su desdicha tanto en peticiones firmadas como en persona, a menudo utilizando el lenguaje de los derechos civiles que ha entrado en el vocabulario chino en esta época de apertura y reforma. Se quejan de que cuando Zhou Wei fue expulsado del partido no se le concedió el derecho a defenderse que tienen reconocido estatutariamente todos los miembros del mismo. Se quejan de que en la apelación presentada contra su ingreso en el campo de trabajo sus abogados no tuvieron ni siquiera la posibilidad de elaborar una defensa, y de que Zhou Wei lleva siete meses esperando una decisión, lo que viola la ley china. Y se quejan de que a los periódicos chinos no se les ha permitido informar sobre el caso, aunque han ido periodistas a entrevistarle.

«Cuando detuvieron a Zhou Wei por primera vez fui dos veces a verle, y no me lo permitieron –dice Li Yushen, otro viejo cuadro, en plan desafiante–. ¿Qué clase de derechos humanos son estos?» En estos días Zhou Wei ha comenzado su segundo año en el campo de trabajo, en el que según su esposa se le han presentado problemas médicos, en particular de tensión alta. Pero los viejos cuadros siguen trabajando. En noviembre de 1999 hicieron público un informe acusando al alcalde de Shenyang de proteger a funcionarios corruptos. Y en junio 43 de ellos firmaron una carta abierta a su amigo, en la que decían: «Las tinieblas en Shenyang acabarán algún día. Amigo Zhou Wei, tú eres un verdadero comunista».